

ESTUDIO DE CASO

Comunidad de Paz de San José de Apartadó:

Ruptura con el Estado como resistencia a la guerra

"La gente, todos con sus gallinas debajo del brazo, los niños con sus perritos, eso fue una alegría pero inmensa, para los que volvían a vivir allá y para los que les acompañábamos."

(Brígida González, Comunidad De Paz San José De Apartadó)

Ubicación de la Comunidad de Paz

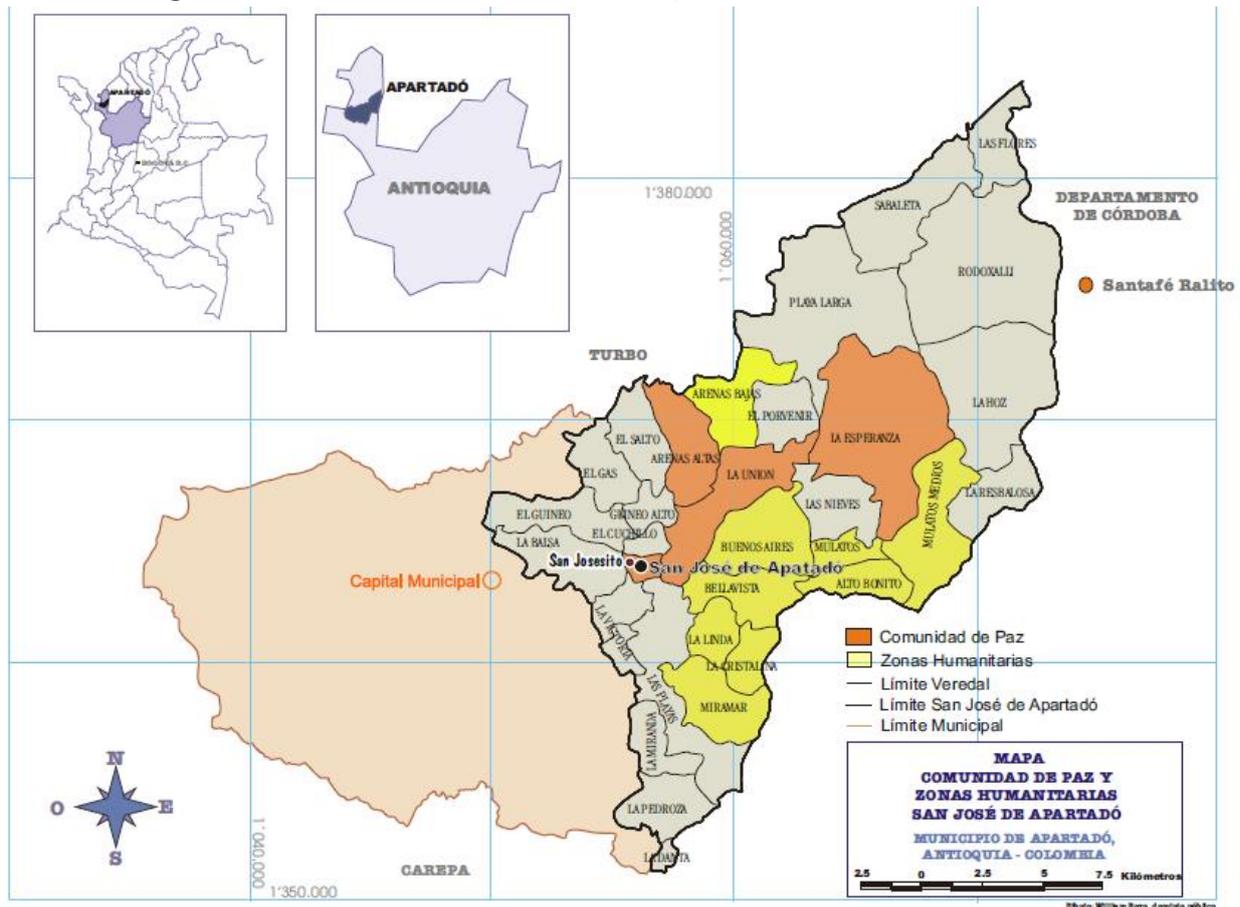
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se encuentra en el municipio de Apartadó, al norte del departamento de Antioquía formando parte de la región del Golfo de Urabá, que en la lengua del pueblo Embera Katío significa "tierra prometida". En efecto se trata de una tierra de exuberantes riquezas naturales, entre ellas abundantes recursos minerales, ventajosa por conformar la esquina noroeste de América Latina entre el océano Pacífico y el Atlántico-Caribe.

La región de Uraba ha sido ancestralmente habitada por varios pueblos autóctonos posiblemente semi-nómades, entre ellos el pueblo Embera que conserva algunos resguardos indígenas en la zona. Desde los años setenta del siglo pasado, esta zona ha sido parcialmente ocupada y controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Fuerzas del Ejército de Colombia y un poco más adelante por grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por lo tanto, hablamos de una tierra que ha sufrido un constante estado de guerra y, si bien es cierto que el cese al fuego por parte de las FARC en 2015 y el cese bilateral entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC decretado el 23 de junio de 2016 han significado una disminución importante en cuanto a violencia sistemática entre actores armados y contra la población civil, este estado de guerra aún persiste en las dinámicas sociales de sus habitantes y se intuye, en general, que no va a terminar con los Acuerdos de paz sino que va a adquirir una nueva lógica. La entrada de más multinacionales extractivistas representa una gran amenaza vital y territorial para todo el país y en especial para la región del Golfo de Urabá.

El municipio de Apartadó tiene un aproximado de 150.000 habitantes, es predominantemente rural y se sostiene con los ingresos que generan las empresas que producen banano para la exportación y que han sido vinculadas con el financiamiento de grupos paramilitares. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a 30 minutos de la ciudad de Apartadó en chivero –vehículo colectivo- está presente actualmente en 7 de las 31 veredas que tiene el corregimiento de San José, una de las subdivisiones administrativas de Apartadó. Su asentamiento comunitario central, San Josecito de la Dignidad, se encuentra en la finca de La Holandita, a un kilómetro de distancia del casco urbano de San José donde se instaló en su fundación la Comunidad de Paz, y donde funcionó hasta 2005 cuando se vio obligada al desplazamiento, como se narrará más adelante. De esta manera, hay familias campesinas

adheridas al proceso y los principios de la Comunidad de Paz en las veredas, de oeste a este, de Arenas Altas, La Unión, La Linda, La Cristalina, Mulatos, La Esperanza y La Resbalosa. En el municipio de Tierralta del departamento de Córdoba, contiguo a Antioquia, también hay actualmente 4 familias que forman parte de la Comunidad de Paz.

Información geo referencial del asentamiento de San Josecito: 7°52'36,5" N - 76°34'1,0" W



Los que optaron por luchar

En la Colombia rural el acceso a educación, a salud, a cultura o a otras fuentes de bienestar que se le suponen al Estado, es muy precario; es un acceso pobre en cantidad y en calidad. Pero esta situación deja de parecer una emergencia cuando la mayor preocupación de las familias que viven en el ámbito rural es proteger sus vidas frente la amenaza de los actores violentos que invaden sus tierras. En San José de Apartadó, la guerrilla, los grupos paramilitares y las bases militares del Ejército tienen cada una sus zonas de influencia y sus lógicas de aniquilación. Como denuncia Brígida González, una de las míticas lideresas de la Comunidad de Paz, cofundadora y antigua miembro de su Consejo Interno, los actores armados “solo nos dejaban tres opciones: irnos, vender o morir”. De hecho, cuando ella analiza el escenario no dibuja a tres actores armados; “nosotros decimos que hay solo dos actores

violentos porque los paramilitares forman parte de la fuerza pública al ser creados por el mismo Estado”. Los protagonistas de este caso son campesinas y campesinos que ante esta situación fatal decidieron luchar.

Contexto histórico: desde la masacre de la UP

El año 1985, a raíz de un proceso de paz parcialmente fallido entre las FARC y el gobierno colombiano, se crea la Unión Patriótica (UP), un partido que acaba por agrupar varios movimientos sociales creando oposiciones resistentes a nivel institucional y que en el municipio de Apartadó coge bastante fuerza. “Esto lo ven como un peligro para el modelo económico que se ha impuesto en la zona”, relata Jesús Emilio Tuberquia Zapata, uno de los líderes principales de la Comunidad de Paz al que todos llaman “El Negro”. La masacre de la UP, en la que se calcula que 5.000 hombres y mujeres –entre cargos políticos, candidatos, militantes y simpatizantes- fueron asesinados por actores armados posiblemente organizados por el mismo Estado colombiano, se hizo explícita también en San José de Apartadó, donde decenas de líderes comunitarios como Bartolomé Cataño -fundador del pueblo de San José, ideador de la Comunidad de Paz y concejal de la UP- fueron asesinados entre finales de los ochenta y finales de los noventa. “Urabá fue sorprendida por una ola de terror”, afirmó Gloria Cuartas, la alcaldesa de Apartadó de la época, para el periódico El Colombiano.

Al mismo tiempo se intensificaba la guerra en el territorio: bombardeos, tiroteos, requisas, masacres, retenes, en los que la población civil quedaba atrapada. Como resultado de esta situación muchas familias se fueron desplazando de la zona, sobre todo hacia las ciudades más cercanas. Sin embargo algunas familias de distintas veredas del corregimiento de San José de Apartadó no cedieron frente a esta lógica genocida, se unieron en una expresión de resistencia única y a través de procesos de formación y encuentros comunitarios entre vecinos y vecinas llegaron a la conclusión de que debían construir un espacio autónomo declarado públicamente como ‘zona neutral’ donde ningún actor armado pudiera hacer presencia. El 23 de marzo de 1997 se firma la declaración de fundación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, un desafío para las aproximadamente 300 familias que habían resistido a la muerte y al desplazamiento, y decidían no ceder ante las amenazas de los cuerpos violentos de la guerra. “Estaba claro que íbamos a poner muchas vidas”, asegura El Negro, campesino de brillante claridad política.

Y efectivamente la violencia brutal llegó una semana después, cuando grupos paramilitares forzaron el desplazamiento de todas las veredas hacia el pueblo de San José donde a través de la solidaridad entre unos y otros se acobijaron todos en pocas casas. De ese modo, con mucho valor y sufrimiento, nació lo que hoy es un proyecto agrario y político de resistencia, un territorio organizado en paz, independiente del Estado y cercano a la soberanía alimentaria y administrativa. En el cuarto apartado, donde explicamos la estrategia de acceso a la tierra y la cronología de los hechos más relevantes, seguimos hablando del proceso de esta población. Ahora, aquí, nos disponemos a mostrar porque la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es un ejemplo de resistencia, no solo a la lógica violenta de su alrededor y del conflicto armado colombiano en general, sino también a la lógica

destructora e individualista del sistema capitalista. Desde su creación, la Comunidad de Paz vive y se organiza a través de unos principios y un reglamento interno a los que cualquier familia o persona que sienta la voluntad de sumarse al proyecto debe desear adherirse.

Compromisos y principios

La Declaratoria contiene 7 artículos que en resumen definen la Comunidad de Paz como aquella “población campesina del corregimiento de San José de Apartadó que libremente se sume a dicho proceso”, que se protegerá de la guerra aunque nunca usará ni poseerá armas ni munición sino que negará cualquier tipo de apoyo, directo o indirecto, a cualquier grupo armado, que no podrá ser objeto de violaciones de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que se compromete a no aceptar la injusticia o la impunidad, a participar en los trabajos comunitarios y a acoger a personas forzadas a desplazarse como consecuencia del conflicto armado.

Sus principios son la libertad, el diálogo transparente, el respeto a la pluralidad, la solidaridad, la resistencia y la justicia. Una de las jóvenes más prometedoras para el futuro liderazgo de la Comunidad de Paz, Ledis Arteaga Guerra, asegura que “el que está en el campo es más libre; lo que buscamos es sentirnos libres pero siempre están detrás algunas cosas: un actor armado etc.”. En cuanto a solidaridad, Brígida lo sintetiza muy bien: “cuando uno entra en la comunidad, uno entra para entregar la vida a los demás”.

Características de una organización y una cultura propias

Unas 35 familias aproximadamente forman parte hoy de la Comunidad de Paz, repartidas entre distintas veredas. Se podría decir que su origen sociocultural es el del campesinado: conscientes de que en sus venas debe correr sangre proveniente de África, de Europa y sangre también de pueblos originarios de América, muchos se definen como humildes campesinos que han aprendido del campo, de la naturaleza y de las tradiciones familiares. Habitualmente sus tierras las han heredado de sus familias, pero en un país que lleva casi 100 años en guerra, los desplazamientos de comunidades enteras y el despojo de territorios han sido tan habituales que a menudo existen núcleos familiares que han comprado sus tierras recientemente cuando ha nacido el propósito de construir un proyecto familiar vital.

En todas las veredas el uso de agua, tanto productivo como para el consumo, proviene de quebradas de agua. Siendo como es, una región rica en recursos, hasta hoy resisten varias nacientes de agua en su territorio. La mayor parte de las veredas ya disponen de energía eléctrica siendo que la de Mulatos la recibió hace solo un año, en 2015. A esta vereda, una de las más lejanas desde el epicentro de la Comunidad de Paz, es decir el asentamiento de San Josecito, se llega solo andando a pie o en mula durante unas 8 horas.

La base de todo: una educación comunitaria

Si bien en un inicio la Comunidad de Paz contó con unas 300 familias, la misma dinámica de la guerra y la necesidad de ser coherentes con los principios y valores internos de este colectivo han hecho que vaya mermando su población. Su pervivencia, a pesar de ser pocos, reside posiblemente en la formación de sus jóvenes. Actualmente hay aproximadamente 35 niños que asisten a la escuela comunitaria propia, el proyecto educativo de la cual ha sido gestionado durante los últimos cuatro años por la hermana Mariela Beltrán, una sabia mujer nutrida con el aprendizaje y la puesta en práctica de varias pedagogías comunitarias de paz y por la teología de la liberación.

Sirly Cerpa, componente del Consejo Interno –del que en breve describimos su funcionamiento-actual, explica que “se busca que los mismos miembros de la Comunidad capaciten a los más pequeños, no gente que venga colocada por el gobierno, y que lo hagan de acuerdo a lo que se vive, lo que ellos han vivido en la Comunidad, a sus principios”. Así pues, la educación comunitaria con la que crecen los infantes por parte de un profesorado de la misma Comunidad de Paz no ha recibido una homologación por parte de la secretaría de educación del Estado pero a pesar de eso, aquellos que quieren seguir con su educación en centros de formación externos a la Comunidad de Paz después de los 13 años pueden hacerlo pasando una prueba de nivel que suelen superar con mejor éxito que otros alumnos externos a la Comunidad.

Uno de los motivos por los que la Comunidad de Paz decidió tener sus propios centros educativos fue que a la hora de ir y venir de la escuela los niños y niñas podían tener que relacionarse con los actores armados que ocupan toda la zona de San José de Apartadó. De hecho, y vulnerando totalmente el Derecho Internacional Humanitario, la escuela del centro urbano del corregimiento de San José está a pocos metros de una base militar del ejército colombiano, colocando en extremo peligro a los 300 alumnos y alumnas de la escuela y a toda la comunidad educativa de ese centro. Actualmente, con el cese al fuego bilateral y el proceso de paz, la situación a gran escala está mucho más calmada, pero hasta el año 2015 se presentaban en esa zona tiroteos, bombardeos y atentados entre guerrilla y ejército.

De este modo, 22 niños y niñas asisten a las clases que ofrecen las profesoras Saida y Marta en el asentamiento de San Josecito y 7 aprenden con el profesor Luis Miguel Cerpa en la vereda de Mulatos, el resto de infantes que hay en otras veredas asisten a las escuelas públicas tradicionales. “La idea es tratar más con la realidad, no tanto con la teoría y la práctica”, explica el profesor Luis Miguel acerca de los métodos que utilizan en la escuelita de su vereda. En esta línea, el jueves, que es el día de trabajo comunitario para todos los habitantes de la Comunidad de Paz, los niños y niñas salen junto al resto de comunidad a trabajar en el campo, con la única diferencia de que ellos retornan al mediodía a almorzar y jugar y el resto trabajan hasta la tarde.

Los frutos: permanencia y consciencia en el territorio

El resultado de una educación más libre y más humana se puede palpar cuando, en sus horas libres, podemos observar a la mayoría de infantes de la Comunidad jugando juntos, haciendo uso de los espacios lúdicos compartidos con respeto y gozando de bastante libertad para andar por cualquier lado, siempre dentro de los límites del asentamiento.

Y se palpa también al hablar con jóvenes brillantes y conscientes como Ledis o su hermano Bladimir Arteaga Guerra, de 31 años, que ha crecido y aprendido en la Comunidad de Paz y asegura que “la escuela comunitaria se enfoca en una vida comunitaria y una vida en el campo, para la permanencia en el territorio: estamos en la tierra porque es algo que nos brinda todo, ¿cómo vamos a salir de ella?”. Bladimir, al que todos llamamos Blacho, explica que, externos a la escuela “se tienen espacios de formación, talleres de alimentación, técnicos etc.”, además de la Universidad Campesina de Resistencia, que se autoconvoca eventualmente. A su vez, Ledis expresa lo que siente sobre la Comunidad de Paz de este modo: “lo que nos hace ser considerados radicales es conservar la dignidad, no dejarse comprar por nada. Hay tanta gente en el campo que tiene tanto para enseñar, que no necesitaron ir a la escuela... lo que falta es amor por el campo, por la tierra, por la vida: se gana consciencia aprendiendo a amar lo que hay a tu alrededor.”

“El individualismo es muy grande en la sociedad y la idea es de crear consciencia comunitaria, un sentimiento hacia el otro como de una gran familia”, explica el profesor Luis Miguel. Los maestros y maestras reciben actualmente un proceso de formación de la hermana Mariela, que es profesional en el campo de la educación alternativa y comunitaria, pero Luis Miguel remarca que “la asamblea es la máxima autoridad, y tiene que aprobar a los que vamos a tener la tarea de ser profesores”.

El Consejo Interno: autogobierno

El artículo séptimo de la declaración de la Comunidad de Paz “reconoce la competencia de un Consejo Interno conformado por siete delegados de la Comunidad de Paz (...) y un Fiscal”. Este Consejo Interno (CI) puede tomar decisiones en nombre de la Comunidad aunque la autoridad máxima de ésta, como afirma el profesor Luis Miguel, es la asamblea que se reúne aproximadamente cada tres meses. Sirly Cerpa asegura que los mecanismos para que se garantice “el derecho a la opinión de las mujeres, de los niños, todos por igual”, funcionan. A nivel veredal, cada asentamiento adherido a la Comunidad de Paz celebra reuniones semanales de seguimiento del mismo modo que el CI se encuentra cada domingo en San Josecito, el asentamiento central, para analizar la situación y comunicar las necesidades y las salidas que se visualizan para la semana siguiente a los organismos de acompañamiento internacional que trabajan para garantizar la vida y los derechos de los líderes comunitarios desde el origen de la Comunidad de Paz.

Este órgano político, que debe cumplir con funciones administrativas y disciplinarias, se renueva cada dos años: seis de los componentes son reelegidos y los otros dos se mantienen para garantizar una continuidad de proyectos e iniciativas. Como elemento ejemplar, en los comicios para el CI no se aceptan candidaturas ni campañas individuales sino que es la comunidad la que propone los nombres de las personas que reúnen las cualidades para ser líderes de la Comunidad de Paz y luego los elige a través del voto. En cuanto a la cuestión de género, y partiendo de la base que todos y todas reciben una educación similar, “cualquier mujer que tenga la capacidad de estar de dirigente y se atreva, tiene la posibilidad: ahora somos dos mujeres en el CI y ha sido la misma Comunidad la que lo ha elegido”, razona Sirly.

Es dura la historia del primer Consejo Interno, recién creada la Comunidad de Paz. Una masacre perpetuada en San José en la que mataron a seis miembros de la Comunidad – “¡y las Hermanas Lauritas y un padre irlandés estaban delante!” exclama Brígida- “sumada a otros asesinatos selectivos acabaron con todo el Consejo Interno de esa época, del inicio de la Comunidad de Paz, luego nadie quería ser del Consejo porque daba mucho miedo”, sigue recordando Brígida. Para los actores de la guerra del sector no era conveniente que existieran líderes populares que lucharan por los derechos del campesinado, el objetivo era tener un control total.

Como se puede ir deduciendo, estamos hablando de un campesinado politizado que a través de la experiencia, la voluntad de cambio, el dolor pero también el amor. Se trata de un actor transformador dentro del panorama colombiano, un actor con consciencia social que podría decirse que significa una excepción al lado de una población rural muchas veces alejada del debate crítico y la vida política más allá del contenido al que acceden a través de los medios de comunicación de masas, como Caracol y RCN, subordinados a intereses empresariales y políticos. Si bien también existen otros colectivos de campesinos -que representa aproximadamente 20% de la población - organizados y politizados, como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, la urabeña Comunidad de Paz no ha hecho parte de éstos en buena parte por tener una posición de autonomía y ruptura muy clara y crítica frente al Estado.

20 años y una cultura propia

En el escenario campesino colombiano encontramos que la mayoría de celebraciones y fiestas, normalmente originadas en la religión católica, acaban girando alrededor del alcohol. En la Comunidad de Paz sin embargo, una de las normas que se creó al primer año de fundación después de que en una celebración un hombre ebrio acabase matando a otro en una discusión familiar, es la de no consumir licor. Sus *rumbas* –así se denomina a la fiesta- y celebraciones se festejan con la alegría propia del baile, la música y el encuentro de seres queridos. Ese ya es un detalle que caracteriza a la Comunidad de Paz y le da un factor cultural muy propio y consciente.

La joven y líder prometidora Ledis Arteaga cuenta que “la fiesta principal de la Comunidad de Paz es la de su aniversario, el 23 de marzo, ahí hay presentaciones artísticas, se toca, se baila”. En otras ocasiones como la Navidad o el fin del año, la mayoría de familias se encuentran también en el salón comunal para festejar juntas estas celebraciones. “En la asamblea también, al final se hace una fiestecita para que la gente no se la pase solamente debatiendo sentada, sino que después hay la rumba, en recocha, feliz, sin trago y sin nada, así libres”, cuenta la lideresa Sirly Cerpa. “Compartir y trabajar juntos, es también algo de la cultura campesina que hemos tenido siempre”, añade la sabia Brígida.

“La comunidad de paz es un espacio de vida donde se construye cada día a través del trabajo, a través de la formación, de las vivencias”, expresa Blacho, mientras se balancea en la hamaca. “Acordémonos hermanos, de los muertos que hemos puesto y brindémosle homenaje con cariño y mucho amor. Vamos todos campesinos para ir fortaleciendo la Comunidad de Paz”, cantan juntos al son de su himno.

Historia y estrategia de acceso: retorno a la tierra sin garantías

Después de vivir las consecuencias locales de lo que se ha llamado el Plan Baile Rojo a nivel nacional, la masacre de la Unión Patriótica, y crear la Comunidad de Paz de San José de Apartadó con la población desplazada de varias veredas, el objetivo de las aproximadamente 300 familias campesinas que la conformaron se convirtió en construir resistencia e intentar retornar a sus fincas. Hay que remarcar que tanto ciertas congregaciones de la iglesia –coordinadas a través de lo que hoy es la Comisión Intereclesial Justicia y Paz- como algunos organismos internacionales de acompañamiento representaron un importante factor de garantía de vida y apoyo social para que la existencia y pervivencia de la Comunidad de Paz pudiera ser una realidad.

Retornos sin garantías

El primer retorno a las fincas de las cuales una semana después de la fundación de la Comunidad de Paz las fuerzas paramilitares y el ejército les habían expulsado por medio de la violencia se dio el 24 de marzo de 1998, celebrando el primer año de vida de la iniciativa. “La gente, todos con sus gallinas debajo del brazo, los niños con sus perritos, eso fue una alegría pero inmensa, para los que volvían a vivir allá y para los que les acompañábamos”, recuerda Brígida. Familias de la vereda de La Unión que habían sido desplazadas de sus fincas a causa de la presencia paramilitar volvían a sus terrenos multitudinariamente. Estos retornos se daban de manera espontánea y colectiva, sin resoluciones jurídicas, “no teníamos garantías del Estado”, explica la veterana que también es una gran artista. En 1999 se intentó retornar a la vereda Mulatos pero esta vez el contexto violento lo impidió. “Mataron a Aníbal Jiménez que era uno de los líderes que estaba coordinando el retorno a Mulatos: entraron los paramilitares, y los militares guardándolos, y le mataron, en una masacre con cinco más”, sigue relatando.

Un poco después de esta tragedia se dio el retorno a la vereda de Arenas Altas, más adelante el de La Esperanza y más tarde se pudo realizar la vuelta al territorio de la vereda de Mulatos. Y es a través de esta dinámica de acción directa colectiva, gracias a la voluntad propia de la Comunidad de Paz de poder vivir y trabajar su tierra, que consiguieron gradualmente y a medida que la presencia y la violencia de grupos armados lo permitieron, ir dispersándose del casco urbano de San José de Apartadó y volviendo a sus fincas propias, a trabajar la tierra.

De todos modos, era en el caserío de San José donde la Comunidad de Paz erigió su espacio vital central con la construcción del Centro de Formación, edificio donde se daban talleres, se alojaban los acompañantes internacionales que ayudaban a garantizar sus vidas, y eventualmente se alojaban también familias desplazadas por el conflicto armado que necesitaban un lugar temporal donde quedarse. En 2004 se originó el proceso de la Universidad Campesina de Resistencia con el que la Comunidad de Paz, junto a otras organizaciones del país, se auto-organizaron en distintas jornadas de formación popular propia que han seguido siendo convocadas hasta la actualidad.

Masacres de 2005 y ruptura con el Estado

A pesar de seguir conviviendo con la lógica de la guerra y haber tenido que sufrir la pérdida de muchos compañeros, como en el caso de la masacre del año 2000 cuando las fuerzas paramilitares asesinaron a siete miembros de la Comunidad de Paz, ésta siguió resistiendo con cierta normalidad hasta el 21 de febrero de 2005. Fue entonces que, nuevamente actores paramilitares conjuntamente el Ejército perpetraron dos masacres que marcarían un antes y un después: por la mañana mataron a garrotazos en la vereda de Mulatos a Luís Eduardo Guerra, uno de los líderes principales del colectivo, junto con su compañera y su hijo, al que decapitaron de manera brutal. Por la tarde, persiguieron al líder Alfonso Bolívar hasta la vereda de La Resbalosa para terminar también con su vida, la de su señora y las de sus dos hijos. Acusados de ser guerrilleros y no por estar construyendo otra realidad, sin ningún tipo de piedad estos cuatro adultos y tres niños fueron asesinados por las fuerzas del Ejército de Colombia acompañados de miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Hay pruebas tan claras, tan sumamente claras, de que el pueblo es el blanco de la fuerza pública...”, exclama Brígida mientras teje.

Blacho, Bladimir Arteaga Guerra, fue el sobrino de Luis Eduardo Guerra y es hoy uno de los líderes más destacados de la Comunidad de Paz. Con una mezcla de rabia y nostalgia explica que su tío “en ese momento era el interlocutor, como representante de la Comunidad de Paz, con la vicepresidencia, se estaba buscando una manera de que el Estado pudiera tener alguna presencia en San José de Apartadó.” A raíz de estas masacres se tomó la decisión de no seguir con ese diálogo y de romper totalmente cualquier relación con el Estado. “¿Para qué interlocutar con un Estado ilegal?”, se pregunta irónicamente El Negro. La situación se agravaba con el constante señalamiento del presidente Álvaro Uribe Vélez contra la Comunidad de Paz, acusándola de tener nexos con la guerrilla de las FARC.

Durante el año 2005, el Estado instaló de cualquier modo una comisaría de policía en el casco urbano de San José, a pocos metros de la escuela y este fue el motivo final para iniciar el desplazamiento de la Comunidad de Paz que, para ser coherente con su principio de no interactuar con ningún actor armado ni permitir su presencia en su territorio, tuvo que empezar de nuevo, a 1 km de distancia, en la finca de La Holandita, donde hasta hoy podemos encontrar su asentamiento principal, San Josecito de la Dignidad. “Con las masacres eso ya sobrepasó todos los límites y con las evidencias claras y descaradas como se daban, ya no había más que hacer”, afirma rotundo El Negro.

La postura de ruptura total con la institucionalidad del Estado colombiano y la violencia que a través del ejército éste trae a los territorios, ha convertido a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en una iniciativa polémica y revolucionaria visitada e investigada por muchos. “La comunidad de paz de San José de Apartadó, junto a otras inspiradas en la misma visión, es una destacada demostración de coraje, resiliencia y dedicación a los elevados valores de paz y justicia, en un entorno de brutalidad y destrucción. No hay mejor símbolo de lucha no violenta y de esperanza, en un mundo torturado por la violencia y la represión”, escribió, por ejemplo, Noam Chomsky.

Eduar Lancharos, miembro de la Comisión Justicia y Paz, religioso, filósofo y gran defensor de los derechos humanos, fue un gran guía para la Comunidad de Paz desde su fundación, dispuesto a denunciar masacres paramilitares y otras injusticias en 1997. En seguida se convirtió en un miembro

más de la comunidad, luchó, trabajó y lideró el espíritu constructivo y rebelde de la Comunidad, perdió a un gran amigo con la muerte de Luís Eduardo Guerra en la masacre de Mulatos y siguió la pelea hasta que, en 2012 fue víctima de un cáncer. “Ahí se ve cuando uno se abandona a sí mismo por un proceso” comenta Bladimir Arteaga, asegurando que Lancheros fue una víctima más de la lógica de guerra en la que vivía la comunidad. Enterrado en el centro del asentamiento de San Josecito, con un monumento en su memoria, la Comunidad de Paz recuerda una de sus grandes frases: “mientras el dolor se vuelva esperanza, siempre habrá comunidad. No puede destruirse”.

Coherencia y claridad

Una de las consecuencias prácticas de esta ruptura, a pesar de ser una política que ya estaba clara desde su fundación, es la negación de todos los miembros de la Comunidad de Paz a la reparación de víctimas –una ayuda principalmente económica- que ofrece el Estado. “Cuando uno le firma un pacto de muerte al sistema está totalmente deshumanizado; cuando uno es capaz de recibir dinero por el cadáver de un familiar, de un humano ya tiene poco, es algo horrible”, se lamenta El Negro. La



sensación es que los mismos que les matan a sus familiares luego les ofrecen dinero. Sobre ese sensible asunto la lideresa Brígida testifica: “a mí me mataron una hija de 15 años en 2005 y a mí que no me vengan a decir que me van a dar plata porque es que yo no necesito plata, yo necesito [a] mi hija viva o que se haga justicia. Tengo 26 familiares asesinados en total, eso no lo pueden reparar económicamente. Nosotros lo que pedimos es una reparación colectiva, pedimos justicia”.

En la entrada de la finca principal de la Comunidad de Paz, igual que en varios otros puntos a su alrededor, podemos encontrar placas y carteles que difunden sus normas básicas:

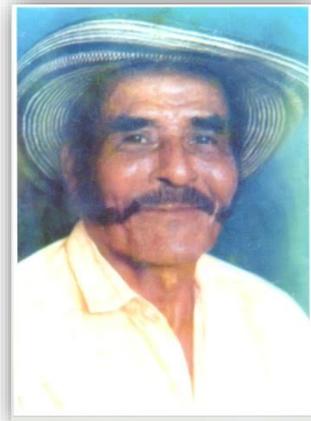
- No portar armas.
- No consumir licor.
- La no injusticia e impunidad de los hechos.
- No a la reparación individual de las víctimas.
- No sembrar cultivos ilícitos.
- No manipular ni entregar información a ninguna de las partes.
- No participar en la guerra directa o indirectamente.

“Aquí los que estamos, es porque estamos claros”, asegura Brígida, que con 61 años, se ha erigido como una gran artista, pintando cuadros en un estilo naif muy expresivo de situaciones y sentimientos que se viven en la Comunidad de Paz, como las masacres de 2005 en Mulatos y La Resbalosa.

Línea de Tiempo

- © **1997, 23 de marzo:** Declaración de fundación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

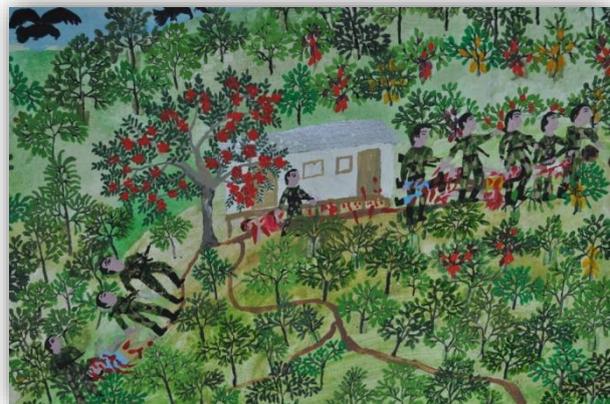
Bartolomé Cataño, ideador de la Comunidad de Paz, asesinado en agosto de 1996



- © **1998:** Inicio del retorno a las veredas
- © **2000:** Masacre a siete miembros de la Comunidad de Paz
- © **2004:** Creación de la Universidad Campesina de la Resistencia

- © **2005, 21 de febrero:** Masacres de Mulatos y la Resbalosa (asesinato líder Luis Eduardo Guerra) ruptura con el Estado y desplazamiento a San Josecito de la Dignidad

Cuadro de Brígida Rodríguez representando el dolor de las masacres de 2005



- © **2013:** el Estado colombiano en boca de Juan Manuel Santos pide perdón a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
- © **2016:** Firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC y persistencia del paramilitarismo en el territorio

Aspectos legales: Propiedad, legitimidad e impunidad

Si hubiese que mirar minuciosamente todo el proceso de desplazamientos y recuperaciones de tierra de este caso, observaríamos que hay muchos vacíos legales, imprecisiones jurídicas y procesos inacabados. En primer lugar, todos los desplazamientos forzados por parte de los actores armados - tanto guerrilla, como grupos paramilitares, como el mismo ejército- son ilegales, son crímenes. En segundo lugar, los retornos de las familias de la Comunidad de Paz, al cabo de meses o años, a sus tierras, si bien son legítimos, a menudo no tienen constancia legal porque posiblemente no haya habido nunca una escritura pública de la propiedad de la tierra o, quién sabe, si la hubo quizás se ha quemado o ha quedado atrás en alguna ocasión en que la familia haya tenido que huir de su hogar corriendo.

La propiedad de la tierra

En un país como Colombia donde existe un gran problema a nivel de titularidad de la tierra teniendo en cuenta que, como relata el sociólogo Omar Rojas Bravo, “la información catastral del país se encuentra desactualizada en un 60%” y “el gobierno no tiene información actual y veraz sobre la distribución de la propiedad rural en el país” –hecho que crea bastantes conflictos intercomunitarios-, más que de legalidad debe hablarse más bien de legitimidad. A pesar de que no es un tema del que se hable mucho, precisamente por el riesgo que implica, hay que contar que la Comunidad de Paz trabaja y vive hoy en algunas fincas que no cuentan con una escritura pública vigente. Aun así, según la ley 1561 de 2012, que creó un proceso verbal especial para las posesiones regulares e irregulares de bienes urbanos y rurales de pequeña entidad, al probar que la familia vive, trabaja y ejerce una conservación ambiental por más de 5 años ya tiene una legítima posesión de esa tierra, de modo que en ese sentido está totalmente amparada.

Un ejemplo paradigmático de las situaciones que se dan en cuanto a propiedad de la tierra es el caso de la finca de La Holandita, tierra donde, en 2005, la Comunidad de Paz empezó de cero a nivel territorial después de desplazarse del caserío de San José de Apartadó a causa de la instalación de la comisaría de policía. Esta finca era originalmente de una cooperativa de la que participaban varios miembros de la Comunidad de Paz, sin embargo durante la persecución política de la Unión Patriótica y de líderes populares desaparecieron todos los miembros de su directiva. La Comunidad de Paz decidió instalarse en esa finca porque los estatutos de la cooperativa amiga decían claramente que debían hacer uso de esa finca aquellos quienes cumplieran con una función social de su tierra. Igualmente, se llevó a cabo la tarea de encontrar los familiares de uno de los directivos difuntos que tenían la escritura pública pero éstos no quisieron entregarla, ni a la Comunidad ni a ningún otro actor: preferían no mojarse por ningún lado como resultado del miedo y la presión que se vive en este tipo de zonas tan influenciadas por las lógicas de guerra.

A finales de los noventa e inicios de la década del 2000, el retorno de las familias de la Comunidad de Paz a sus fincas en diferentes veredas se dieron en circunstancias parecidas: en algunos casos podían tener la escritura pública en la mano y en otros casos no, pero en cualquier caso, por un lado tenían el mismo derecho a regresar a la tierra donde habían vivido y cultivado durante años y por el otro,

no había ningún actor administrativo, político o jurídico que averiguase y verificase tal información ni garantizara que el campesinado pasaba por un proceso de restitución de tierras. Tocaba hacerlo de manera autónoma y autogestionada, como han aprendido muy bien en la Comunidad de Paz.

Impunidad frente a las masacres

En el corregimiento de San José de Apartadó y seguramente en toda la región de Urabá, brutalmente acechada por la guerra, ni los derechos humanos ni el Derecho Internacional Humanitario (DIH) son acatados o sirven como garantía de la vida de los habitantes del medio rural. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se apoyó en el DIH y apeló a la Convención de Ginebra en su nacimiento, pero aun así en su día a día no ha visto efectos prácticos de estos pilares jurídicos internacionales.

Por otro lado, con su fundación el año 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a la Comunidad de Paz medidas cautelares, según las que se aconsejaba al Estado proteger de manera especial a éste colectivo por su situación de riesgo. Más adelante, en el 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entregó las medidas provisionales, según las que se ordena –ya no se aconseja– al Estado buscar medidas claras para proteger a la Comunidad de Paz. Sin duda hemos visto, con tantas masacres cometidas no solo por actores paramilitares sino por el mismo ejército, que estas medidas han sido totalmente violadas por los gobiernos de Carlos Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

El único gesto que algunos sectores de la Comunidad de Paz han valorado por parte de las instituciones públicas, a modo de reconocimiento de los hechos, fue el que tuvo que protagonizar el año 2013 el presidente Santos cuando pidió perdón a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó públicamente: "Hace algunos años, desde la primera magistratura de la Nación, se hicieron acusaciones injustas a una comunidad –la Comunidad de Paz de San José de Apartadó–, respecto a las cuales la Corte Constitucional ordenó al Estado, en la cabeza del Presidente, retractarse. Hoy quiero, en este escenario de los derechos humanos, ante el país y ante el mundo, cumplir con esta retractación", dijo el jefe de Estado. Para otros miembros de la Comunidad, este acto significó una absoluta burla.

A pesar de esto, merece la pena en este apartado dedicado a las bases legales de este caso, hablar de la casi total impunidad en la que han quedado hasta ahora la mayoría de asesinatos, masacres y desplazamientos que ha sufrido la Comunidad de Paz. Según el estudio que ha hecho personalmente el Padre Javier Giraldo, defensor de la Comunidad de Paz desde hace años, más de 300 personas vinculadas a éste colectivo han sido asesinadas durante sus 20 años de vida. En su libro "Fusil o toga. Toga y fusil. El Estado contra la Comunidad de Paz", relata detalladamente cada una de las agresiones. De muchos de estos crímenes hay procesos en marcha, pero la lentitud y la impunidad son la tónica básica. El padre Giraldo es de las personas que más horas y energías le ha puesto a la recolección de testimonios y fotografías de todas las víctimas de la Comunidad de Paz

Por la masacre de Mulatos del año 2005, por ejemplo, que está actualmente en proceso en las instancias de Bogotá, hay solamente implicados cuatro soldados de bajo rango y cuatro cabos del

ejército, pero ningún máximo responsable. Los actores intelectuales de toda esta masacre gozan de una impunidad total.

Riesgos con el proceso de paz

La situación actual con la implementación de los Acuerdos de Paz, para la Comunidad de Paz pero también para todo el campesinado colombiano en general, es leída desde muchos líderes locales como de riesgo inminente. Al mismo tiempo en que grupos guerrilleros van abandonando el territorio para comenzar su proceso de desmovilización, va creciendo en las zonas rurales la presencia de actores paramilitares en muchas ocasiones al servicio de grandes terratenientes o de empresas multinacionales que consiguen instalarse en zonas ricas en recursos naturales antes ocupadas y guardadas por la guerrilla. Se sabe que en varias veredas de la zona, la función de intermediario en el marco del narcotráfico que a menudo ejercía la guerrilla hasta ahora la están empezando a monopolizar grupos paramilitares, es decir que el impuesto que antes el pequeño campesino que cultiva coca le pagaba a las FARC pasaría a pagárselo al paramilitar. En el mes de octubre de este 2016, la Comunidad de Paz se encontró con presencia de paramilitares en su territorio y éstos aseguraron que “llegamos para quedarnos”.

Según la tesis doctoral de la exalcalde de Apartadó, Gloria Cuartas, el mapa del desarrollo capitalista, de la presencia de recursos naturales, explotación y extracción de bienes, se parece mucho al mapa de la presencia de actores armados en esta guerra. Por lo tanto, según el punto de vista de esta defensora de los derechos humanos y la experiencia de varios líderes de la comunidad, existe un link entre empresas multinacionales, grupos paramilitares y el mismo Estado colombiano, que conjuntamente puedan estar estudiando una manera de explotar los recursos naturales locales. Para muchos, las perspectivas del postconflicto son peores que la misma guerra, porque durante la guerra se daban hechos ilegales explícitos más sencillos de denunciar, pero en la coyuntura que se acerca, con la aprobación de tratados de libre comercio, leyes como la de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social o ZIDRES y la franca apertura neoliberal, puede que los despojos y las violaciones se hagan de manera legal.

“Creo que se pueden tomar la tierra porque ahorita con las armas jurídicas llegaron a tener las mismas leyes como herramienta legal para avanzar”, asegura El Negro, gran analista político –que hace unos meses advertía de que ganaría el “no” en el plebiscito que debía ratificar los Acuerdos de Paz y que hasta hace poco tiempo era analfabeto. “El paramilitarismo es creado por las empresas y por el Estado colombiano desde el año 1962 de común acuerdo con los Estados Unidos y se crea para el exterminio de organizaciones sociales y el supuesto comunismo en Colombia”, relata, “hoy el gobierno de Santos habla de un acuerdo de paz, pero no desmonta el paramilitarismo porque lo necesitan como mecanismo para avanzar, es una política del Estado colombiano”.

“Nosotros tenemos una fe y una esperanza de que la Comunidad de Paz no se acabe. A nosotros no nos acaban, seguiremos adelante hasta el último paso: si yo me muero seguirá otro”, declara Joaquín Pino David, de 83 años, otro de los cofundadores de la Comunidad de Paz que asegura hasta hoy que “como decía la UP, si a nosotros nos matan, queda la juventud”, con todo lo que conlleva. Por lo visto,

la esperanza es lo último que esta comunidad va a perder, pero la experiencia y el tiempo les ha enseñado a ser realistas y estar en posición de alerta.

Trabajo comunitario y cacao justo

¿Y cuál es la meta de tanto esfuerzo? Poder vivir trabajando la tierra en paz.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde un inicio, y como su nombre indica, se ha basado en el trabajo y la lógica agrícola comunitaria como arma para defenderse contra el panorama violento del que se rodea. A grandes rasgos, existen tres tipologías distintas de uso de la tierra concebidas desde la Comunidad: aquellas tierras que son de uso individual, aquellas tierras de uso y provecho de grupo –de entre dos y cuatro personas, incluso jóvenes con iniciativas propias, que se asocian para cultivar y cuidar un terreno normalmente dedicado al *revuelto*, es decir, a la producción para la alimentación propia-, y aquellas tierras que son de uso comunitario y que se trabajan colectivamente, el fruto de las cuales se dedica a la manutención de todos.

El joven Blacho, que vive en la lejana vereda de Mulatos, cuenta que “allí tenemos un grupo de trabajo con el que producimos alimento básicamente, para el sustento nuestro, y a nivel comunitario producimos cacao, producimos arroz, maíz, para el bien común”. Los jueves son los días de trabajo comunitario por excelencia en todas las veredas. Después de un buen desayuno, en el asentamiento San Josecito por ejemplo, en La Holandita, la comunidad entera se divide las tareas a realizar y sale en grandes expediciones, jóvenes, adultos, niños, niñas, hacia las fincas donde hay trabajo por hacer. El objetivo ha sido llegar a ser autónomos a nivel comunitario, de manera que aparte de varias fincas de cultivo comunitario también disponen de pequeñas estaciones de procesamiento y empaque propias y de estrategias y vías de comercialización y venta.

“El proyecto económico de la Comunidad es agroecológico y autosostenible”, explica Bladimir Arteaga, y es importante entender, que más allá de que sea ideal llegar a construir un modelo así, es la misma lógica de la guerra la que les llevó a tener un proyecto autónomo. En la década del 2000 se vivían frecuentemente situaciones de bloqueo económico-comercial de la Comunidad y el corregimiento de San José en general ya que actores violentos amenazaban o asesinaban a los choferes de los chiveros –vehículos colectivos- que traían pasajeros y comida desde la ciudad de Apartadó. “La idea era, a través de ese cerco económico, sacarnos de la región. Mataron a muchos. Entonces empezamos a salir todos juntos a buscar la comida al pueblo, con nuestras bestias, pero no podíamos seguir así, teníamos que buscar una forma de sostenernos”. Eso les llevó, por ejemplo, a desarrollar cultivos de arroz, una de las bases de cualquier comida en la Colombia rural, y conseguir tener reservas de maíz, plátano, yuca, fríjol para todo el año.

Del primitivo al cacao justo

En esa misma época el cultivo principal de todos los agricultores de la Comunidad era el primitivo, un banano pequeño que se exportaba. Brígida, mientras sigue tejiendo con sus manos duras de tanto trabajar, cuenta que después de vivir algunas dificultades con la producción y la venta del primitivo,

la Comunidad pasó a tener como cultivo principal el cacao y en poco tiempo se consiguió crear un buen vínculo de exportación hacia Europa, con un sello de comercio justo. De este modo, según cuenta Blacho, consiguieron “una certificación de cacao orgánico, otra certificación de comercio justo y con un comprador principal en Inglaterra”. Para este comprador, el producto final derivado del cacao de la Comunidad de Paz son pastillas de jabón con aroma a cacao. Por su parte, el cacao de comercio justo también se distribuye a nivel colombiano.

La Comunidad de Paz tiene un importante flujo de información con otras comunidades a nivel internacional, con otros saberes, con otras causas y otras maneras de hacer gracias a la cantidad de visitas que recibe y la cantidad de encuentros a los que acude. El Negro, por ejemplo, no se acuerda de cuántos lugares ha visitado ya, pero se acuerda muy bien de una ecoaldea que visitó en Irlanda que le impactó por su manera de funcionar. Blacho, por su lado, quedó encantado del aprendizaje y la experiencia en su paso por la comunidad Tamera en Portugal. De estos intercambios la Comunidad ha podido nutrirse de otros tipos de medicina –técnicas como el reiki, yoga, terapias naturales, etc.-, de pedagogías y también de técnicas agrícolas como la permacultura. Aprendieron que algunas *malas hierbas* tienen, de hecho, muchas funciones y, como cuenta la lideresa Sirly Cerpa, “sembramos, por ejemplo, el maní forrajero para que haga de protector de la tierra y del cacao”.

Un entorno problemático: cultivos ilícitos y lógica extractivista

“Fuimos 11 hermanos y nos criaron cultivando comida y nunca mi papa tuvo problemas: yo nunca voy a sembrar una mata de coca en la tierra que heredé de él”. Mario Cerpa, papá de la lideresa Silry, se adhirió a la Comunidad de Paz junto a cuatro de sus cinco hijos hace unos seis años cuando una comisión del Consejo Interno llegó a su vereda, perteneciente al departamento de Córdoba, a visibilizar el proyecto e invitar a más agricultores a participar de él. “Me gustó por la resistencia que representa, y he aprendido mucho, trabajamos juntos para construir la paz y las cosas buenas”.

Por su cercanía con la frontera a Panamá, Urabá es una zona muy afectada por el narcotráfico y en este sentido el señor Cerpa cuenta que a su alrededor, muchos propietarios de pequeñas y medianas fincas cultivan marihuana y coca porque es la mejor manera de hacer buen dinero, aunque también es una buena manera de entrar en círculos de violencia. El cultivo de coca y marihuana y la producción de cocaína es un negocio que han incentivado los mismos actores de la guerra, incluido su tráfico y lucro, y es por eso y por las energías nocivas para cualquiera que esté cerca del narcotráfico, que la Comunidad de Paz tiene como norma que sus miembros no trabajen con ningún cultivo ilícito.

Otra de las grandes funciones del campesinado colombiano –que según en qué regiones también ha llevado a cabo, consciente o inconscientemente, la guerrilla que habita los montes- es la de la protección de los recursos naturales. Como explicábamos en la introducción, Urabá es un territorio de rica naturaleza, “la Tierra prometida”, y la lógica neoliberal, en este tiempo en el que se aproxima la “paz”, no perdona. “El Cerro del Nudo de Paramillo, división del río Sinú y el Salmoré, divide Córdoba de Antioquia y guarda muchas minas de oro, carbón, petróleo, etc. entonces al Estado le interesa empezarnos a echar de nuestro territorio”, explica el señor Mario Cerpa, quién más de una vez ha sido amenazado por las fuerzas paramilitares servidoras de las grandes multinacionales

extractivistas, como explica con el caso de la construcción de una gran represa: “la propietaria de la represa de Urrá pagó a los *paracos* [paramilitares] para que hicieran salir a la gente y mataron a los que se organizaron.”

Con su sombrero tradicional, Mario Serpa, que saca de su finca arobas y arobas de arroz, maíz, frijol, cacao, yuca y mucho más, asegura que “el dinero trae muerte, la comida trae vida” y opina que “esa es una de las cosas que la comunidad debe mejorar: poder llegar a ser totalmente autosuficientes”. Tal vez se refiere a recuperar de manera rotunda prácticas tradicionales campesinas como el trueque –que se practican hoy día pero de forma casera, familiar-: cultivar para el consumo propio y llegar algún día a poder intercambiar el excedente de lo cultivado por otros productos y servicios que falten, pero dejar de trabajar por dinero y para el extranjero. “El espacio colectivo genera alegría, es un triunfo el hecho de poder seguir acá”, asegura contento Blacho.

Como ellos mismos interpretan, 300 víctimas ofrendaron la vida por la posibilidad de la existencia de esta Comunidad de Paz y a pesar del dolor, en el día a día de este rincón de Colombia siguen brillando las sonrisas de dignidad en los rostros de los campesinos y las campesinas.

Referencias bibliográficas

“Noche y Niebla, Panorama de derechos humanos y violencia política en Colombia”, CINEP, N° 6, Bogotá, Octubre de 2005

“Noche y Niebla, Panorama de derechos humanos y violencia política en Colombia”, CINEP, N° 46, Bogotá, abril 2013

“Fusil o toga. Toga y fusil. El Estado contra la Comunidad de Paz”, Javier Giraldo Moreno

“Geografías de la guerra y territorios de resistencia: experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Urabá antioqueño, 1985-2013”, Glorias Isabel Cuartas, Bogotá, 2015.

“Cronología de la agresión contra la Comunidad de Paz”, Javier Giraldo Moreno, blog:
[<http://javiergiraldo.org>]

“Chocolate y paz”, documental audiovisual, Gwen Burnyeat y Pablo Mejía, San José de Apartadó, 2016.

“Soberanía Alimentaria, Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, documental audiovisual de Albert Farnós [<https://vimeo.com/15048477>]

Foto-reportaje sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó Obreros de la PAZ de Agustín Fernandez, artículo en Rebelión: [<http://www.rebellion.org/noticia.php?id=144931>]

Créditos

Comunidad de Paz San José de Apartadó

Gracias por la acogida, el aprendizaje, la rebeldía y la esperanza:

- Hermana Mariela Beltrán
- Bladimir Arteaga Guerra
- Brígida González
- Jose Emilio Tuberquia
- Don Joaquín y don Aníbal
- Mario, Sirley y Luis Miguel Serpa
- Ledis Arteaga Guerra
- Operazione Colombia
- PBI

Sistematización realizada por Berta Camprubí

Fotografías de Javier Giraldo, Jordi Vinyals y Berta Camprubí

San José de Apartadó, enero de 2017

Galería fotográfica



Brígida recogiendo algunas verduras en la huerta de su grupo de trabajo



Brígida Gomzález y Elisenda la hija perdió



Brígida delante la casa naranja en el pueblo de San José donde vivió hasta 2005 cuando se instaló la estación policial a pocos metros



Los niños y niñas, junto a la profesora Marta y la hermana Mariela, encontraron una serpiente X en el camino a Apartadó



Obra artística de Brígida González representando la Masacre de Mulatos por paramilitares y el ejército



Espacio de procesamiento de arroz y cacao de uso comunitario de la Comunidad de Paz



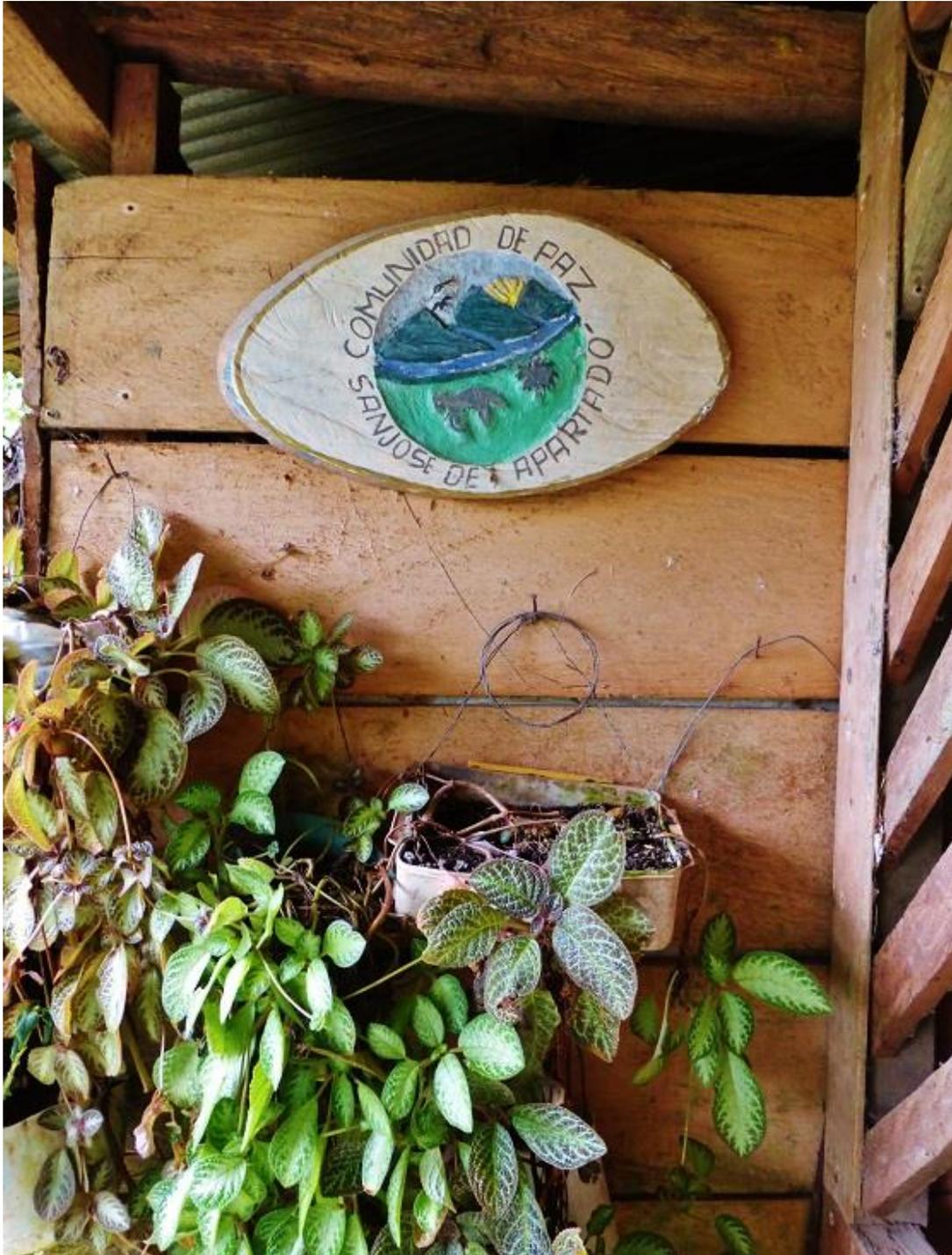
Escuela comunitaria del asentamiento de San Josecito



Escuela comunitaria del asentamiento de San Josecito



Don Joaquín preparado para ir a recoger cacao



El escudo de la Comunidad de Paz en una vivienda